



000009

*Comisión Extraordinaria
de Reformas al Sector Justicia
Congreso de la República de Guatemala, C. A.*

*28 de septiembre de 2011.
Ref. D - 02-mf-11*

*Licenciada
Ana Isabel Antillón
Directora Legislativa
Congreso de la República
Su Despacho*



Licenciada Antillón:

De manera atenta me dirijo a usted, deseándole éxitos en sus labores diarias.

Remita el Dictamen Desfavorable a la Iniciativa de Ley identificada con el No. 4285 de Dirección Legislativa, que dispone aprobar Ley de Protección para Jueces y Fiscales Especiales, solicitándole se sirva efectuar los procedimientos respectivos.

Agradeciendo su atención a la presente, me suscribo.

Deferentemente,

*Licenciada Nineth Montenegro
Presidenta*



*N.M/mf
c.c. archivo*



000010

*Congreso de la República
Guatemala, C.A.*

COMISIÓN EXTRAORDINARIA DE REFORMA AL SECTOR JUSTICIA

D I C T A M E N

HONORABLE PLENO

Con fecha cinco de abril del año en curso, el Honorable Pleno del Congreso de la República conoció y remitió a la Comisión Extraordinaria de Reforma al Sector Justicia, para su estudio y dictamen la iniciativa identificada con el Registro Número cuatro mil doscientos ochenta y cinco (4285) de Dirección Legislativa, presentada por los Diputados Roberto Ricardo Villate Villatoro, Lilian Elizabeth Donis, Galim Adami Morales Barrios y compañeros, que dispone aprobar "**LEY DE PROTECCIÓN PARA JUECES Y FISCALES ESPECIALES**", para que se pronunciara sobre su importancia y conveniencia.

ANTECEDENTES

La iniciativa se compone de 11 artículos, dentro de los cuales se incluye 1 de reglamento, 1 de derogatoria y el de vigencia. El objetivo de la misma es:

- Crear un mecanismo para que los jueces y fiscales que tenga a su cargo procesos penales de alto riesgo tengan protección.
- Determinar que los recursos para pagar la protección antes referida deberán venir de un fondo constituido con el 0.5% del presupuesto total asignado al Ministerio Público -MP- y al Organismo Judicial -OJ-.
- Crear una "Junta Jurídica Penal de Protección" quien será la que determine a qué juez y a qué fiscal se le debe brindar protección y de qué tipo.

En virtud de su relación con la iniciativa para el análisis de la misma se pidió la opinión del Ministerio Público y de la Corte Suprema de Justicia -CSJ- que son quienes de acuerdo a la exposición de motivos, el artículo 7 y el artículo 8 están vinculados directamente con la iniciativa.

Además de su opinión se les requirió a estas instituciones que indicaran a cuánto asciende el presupuesto que actualmente destinan para este tema y como se distribuye (cuántos juzgadores gozan de protección, qué tipo de protección, por cuánto tiempo, etc) y que indicaran cuál es el procedimiento que se utiliza actualmente para establecer quién debe gozar de algún tipo de protección y los criterios para determinar a quién se le otorga y a quién no.



000011

Congreso de la República
Guatemala, C.A.

A esta interrogante respondió el Ministerio Público mediante oficio identificado con el número DFG-489-2011, que el presupuesto asignado a este fin es de Q30 millones aproximadamente. Que alcanza para la protección de 55 fiscales, cuya duración depende del tiempo que labore el fiscal en el MP, y de las evaluaciones que haga el departamento de seguridad sobre la necesidad de mantener el mismo o no.

Informó asimismo que para que pueda prestarse el servicio debe determinarse que existe una vulnerabilidad contra la vida, integridad física, mental y moral, propiedad, libertad propia o de los familiares de un fiscal. Y su otorgamiento depende de una solicitud que deben hacer los interesados ante el departamento de seguridad, que previo análisis y evaluación de riesgos de este departamento se otorgara. Siendo los criterios que sustentan dicho análisis los siguientes: a. identificación del entorno en donde se moviliza o desenvuelve el solicitante; b. tipo de actividad que realiza y cargo que desempeña en la institución; c. casos que conoce el solicitante; d. identificación del tipo de personas que pueden amenazarlo; e. determinar el nivel de riesgo; f. viabilidad de la aplicación de las medidas de protección; y, g. la adaptación de la persona a las medidas de seguridad.

La Corte Suprema de Justicia emitió su opinión hasta el día en que asistió a la reunión de trabajo de la Comisión Extraordinaria de Reforma al Sector Justicia de fecha 17 de agosto de 2011, a la que también asistió una representante del Ministerio Público, el diputado jefe del bloque ponente de la Iniciativa y un representante de la Procuraduría General de la Nación.

En esta oportunidad la CSJ hizo un análisis de la iniciativa e hizo una presentación. De dicho análisis, entre otras conclusiones a las que llegó la Corte se pueden destacar las siguientes:

1. "El proyecto analizado no es congruente con la realidad y las necesidades de seguridad del Organismo Judicial, los fondos asignados son insuficientes y la organización y funcionamiento propuestos violatorios de las garantías constitucionales otorgadas a este Organismo.
2. En cuanto a la independencia funcional, se considera que la propuesta de integración de la Junta Jurídica Penal de Protección, vulnera esta garantía, ya que el Organismo Judicial estará sujeto a lo que dicha Junta resuelva, siendo ella integrada por dos instituciones ajenas a este Organismo.
3. Al integrar la referida Junta Jurídica Penal de Protección el Fiscal General, también se puede comprometer la independencia judicial, al ser parte el Ministerio Público en los juicios que conocen los juzgados y tribunales de alto impacto.
4. Es garantía constitucional del Organismo Judicial, la selección de su personal, por lo que al intervenir instituciones ajenas en esa decisión, también se



000012

Congreso de la República
Guatemala, C.A.

estaría violando este precepto, específicamente en cuanto al nombramiento de personal al que se refiere el artículo 4 de la iniciativa analizada.

5. Por último la independencia económica del Organismo Judicial se ve afectada, en cuanto a que se dispone crear un fondo común con el 0.5% del presupuesto de este Organismo y del Ministerio Público, teniendo injerencia nuevamente, instituciones que nada tienen que ver con la función del Organismo Judicial, está vez en el tema económico”.

El Ministerio Público por su parte, además de la información que ya había proporcionado, se manifestó en contra de la iniciativa de forma verbal, entre sus conclusiones de pueden destacar las siguientes:

1. “... lo que vemos allí (en la creación de la Junta Jurídica Penal) es que se atenta contra la autonomía del MP. El MP por ser una institución con su propia legislación obviamente tiene su política interna en donde tiene contemplado lo que es una asignación presupuestaria también en un cuerpo de agentes de seguridad el cual está compuesto por 396 agentes de seguridad.
2. En este caso no sería la entidad idónea (la Junta Jurídica Penal) para brindar la seguridad porque no puede estar el MP viendo o conformando la protección de los jueces dentro del organismo judicial.
3. Lo que debe hacerse es fortalecer en este caso a la dirección de la policía nacional civil con todas las coordinaciones necesarias para que preste esta seguridad.
4. Esta (iniciativa de) ley esta vulnerando varios principios constitucionales, especialmente el artículo 251 de la Constitución Política de la República el cual por mandato legal, menciona que el MP goza de autonomía, lo cual implica que es responsable de velar por la seguridad y protección de su personal cuando lo considere pertinente.”

FINALIDAD DE LA INICIATIVA

El diputado ponente Roberto Ricardo Villate Villatoro se manifestó en torno a la finalidad que se busca con la iniciativa propuesta. Expuso que se hace necesario aprobar una norma de este tipo ya que hay casos prácticos como el sucedido en Mazatenango, Suchitepéquez donde individuos dispararon en contra de la sede del MP o el caso de una jueza del ramo penal de un juzgado de “alto riesgo” a quien se le proporcionó un vehículo blindado pero no se le proporcionó gasolina para poder utilizarlo, que motivan que se legisle sobre el tema de la protección de jueces y fiscales en casos especiales.



000013

Congreso de la República Guatemala, C.A.

El diputado también hizo énfasis en que hay que apoyar a las personas que aplican la justicia, no importando si dicho apoyo se debe hacer por medio de la aplicación u aprobación de un decreto u otro.

Estos argumentos son recogidos y desarrollados en la exposición de motivos de la iniciativa, en donde se argumenta que:

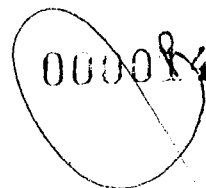
"No obstante, es preeminente que los fiscales especiales, jueces y magistrados que conocen procesos penales sobre delitos de alto impacto social y narcotráfico se les concedan los medios idóneos, necesarios y justos para su seguridad personal y de su familia, puesto que cada día ponen en peligro su integridad y la vida al resolver procesos penales que tienden a sancionar a los responsables que violentan la ley y cometen hechos delictivos considerados éstos por la sociedad como de alto impacto social y del narcotráfico, razón por la cual las entidades públicas a las cuales prestan sus servicios profesionales deben proporcionar los medios necesarios para la seguridad de su persona y familia. Asimismo, los medios como vehículos automotores especiales y la seguridad personal que tiendan a resguardar su integridad deben proporcionárseles por parte del Estado".

CONSIDERACIONES DE LA COMISION

Es importante destacar que la finalidad que tiene la iniciativa es sentida y compartida por la Comisión Extraordinaria de Reforma al Sector Justicia, ya que se ha visto ejemplos puntuales de las amenazas e intimidaciones que sufren los operadores vinculados con la justicia penal como consecuencia del ejercicio de sus cargos.

Sin embargo, es importante hacer ver que dentro del ordenamiento jurídico guatemalteco ya existe regulación al respecto que se ajusta a la autonomía e independencia que la Constitución Política otorga al Ministerio Público y a la Corte Suprema de Justicia, respectivamente.

En el caso del MP ya existe el decreto 70-96 del Congreso de la República "Ley para la Protección de Sujetos Procesales y Personas Vinculadas a la Administración de Justicia Penal" que data del año de 1996. Y que es reglamentado por el Acuerdo No. 2-2007 del Consejo del Ministerio Público. La ley en mención "crea el Servicio de protección de sujetos procesales y personas vinculadas a la administración de justicia penal, en adelante denominado "Servicio de Protección", que funciona dentro de la organización del Ministerio Público" (artículo 1), y tiene como "objetivo esencial, proporcionar protección a funcionarios y empleados del Organismo Judicial, de las fuerzas de seguridad civil y del Ministerio Público, así como a testigos, peritos, consultores, querellantes adhesivos, mujeres víctimas de violencia, sus hijas e hijos, así como otras personas que estén expuestas a riesgos por su intervención en procesos penales. También dará cobertura a periodistas que lo necesiten por encontrarse en riesgo, debido al cumplimiento de su función informativa".



Congreso de la República *Guatemala, C.A.*

De igual forma el Congreso de la República aprobó en el año 2009 el decreto 21-2009 que contiene la "Ley de Competencia Penal en Procesos de Mayo Riesgo". Esta ley establece en su artículo 1 que: *"La Corte Suprema de Justicia determinará los tribunales competentes para conocer en la fase procesal que corresponda, en los procesos por hechos delictivos cometidos en el territorio de la República y que presenten mayor riesgo para la seguridad personal de jueces, magistrados, fiscales y auxiliares de justicia, así como de los imputados, testigos y demás sujetos procesales que intervengan en estos procesos"*, y en artículo siguiente reconoce que en el caso de los delitos que enumera en el artículo 3* se presentan mayores riesgos para la seguridad de las personas antes descritas y por lo tanto se hace necesario que existan medidas extraordinarias de seguridad para: *"a) El resguardo de la seguridad personal, en la realización de los actos jurisdiccionales, las actuaciones procesales, la investigación, acusación y defensa; o, b) El resguardo y traslado de los procesados privados de libertad; o, c) El resguardo de la seguridad personal en el espacio físico de Juzgados y Tribunales, incluyendo los aspectos de logística."*

Mientras que la iniciativa en análisis tiene por objeto, según el artículo 1 de la misma: *"... conferir seguridad y protección a los profesionales del Derecho que integran los juzgados, salas de la corte de apelaciones y fiscales especiales que conocen de procesos penales por medio del cual se sindic a personas por hechos delictivos de alto impacto social y de narcotráfico."*

Con las normas citadas anteriormente se demuestra que ya hay por lo menos dos leyes de la República que regulan exactamente la misma materia que la que pretende regular la iniciativa en análisis.

Esto implica que el problema no radica en la inexistencia de normas que obliguen a determinadas instituciones a brindar la protección que se propone a los jueces y fiscales, sino que radica en la falta de voluntad y recursos como bien lo hace ver el Organismo Judicial al afirmar que "los fondos asignados son insuficientes" para poder aplicar satisfactoriamente la norma. Y a la vez recomienda la *"creación de un fondo independiente al Presupuesto de Ingresos del Organismo Judicial, destinado exclusivamente para la seguridad de los Jueces y Magistrados o la ampliación de dicho presupuesto en forma considerable"*.

Esto implica que seguir legislando al respecto sin resolver el problema de la procedencia de los recursos resulta ineficiente, pues no se logra conseguir el objeto deseado.

* **Artículo 3. Delitos de Mayor Riesgo.** Para los fines de la presente Ley, se consideran delitos de mayor riesgo los siguientes: a) Genocidio; b) Los delitos contra personas y bienes protegidos por el Derecho Internacional Humanitario; c) Desaparición forzada; d) Tortura; e) Asesinato; f) Trata de personas; g) Plagio o secuestro; h) Parricidio; i) Femicidio; j) Delitos contemplados en la Ley Contra la Delincuencia Organizada; k) Delitos cuya pena máxima sea superior de quince años de prisión en la Ley Contra la Narcoactividad; l) Delitos contemplados en la Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos; m) Delitos cuya pena máxima sea superior de quince años de prisión en la Ley para Prevenir y Reprimir el Financiamiento del Terrorismo; y, n) Los delitos conexos a los anteriores serán juzgados por los tribunales competentes para procesos de mayor riesgo.



000015

Congreso de la República
Guatemala, C.A.

A raíz de ello surge la duda sobre si lo que se necesita es establecer la obligatoriedad de destinar fondos para la protección o si lo que se necesita es establecer de dónde provendrán los fondos (entiéndase una fuente de ingreso específica)? Así como sucede con algunos programas de salud por ejemplo, cuyo financiamiento proviene del impuesto al tabaco o de las bebidas alcohólicas. O el caso del mantenimiento de la infraestructura vial cuyos recursos provienen del impuesto sobre los hidrocarburos.

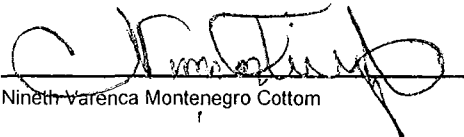
CONCLUSIONES

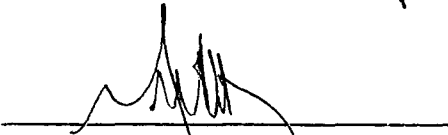
La iniciativa 4285 que dispone aprobar la Ley de Protección de Jueces y Fiscales Especiales representa un esfuerzo encomiable de los diputados ponentes que se sustenta en una necesidad de brindar protección a los Jueces y Fiscales en casos especiales que la Comisión Extraordinaria de Reforma al Sector Justicia comparte plenamente. Ya que al final lo que se busca es lograr una justicia pronta y cumplida, que no esté sujeta a intimidaciones de ningún tipo.

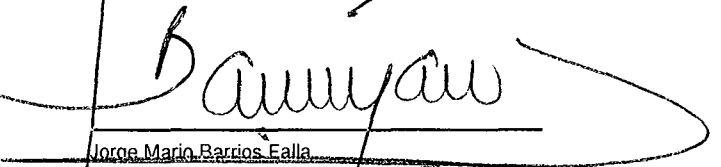
Sin embargo, después de escuchar a las instituciones que se verían afectadas y de leer dos decretos que son ley de la República, esta Comisión puede afirmar que no se trata en el presente caso de la ausencia de normas sobre la protección *per se*, sino que más bien se trata de encontrar la fuente para financiar dicha protección a fin de que las normas que están vigentes se constituyan en derecho positivo, es decir, se hace necesario legislar, por ejemplo en el sentido de establecer un impuesto específico destinado a la seguridad y justicia de donde un porcentaje corresponda específicamente a la protección de jueces y fiscales.


En virtud de lo antes expuesto, la Comisión Extraordinaria de Reforma al Sector Justicia emite **DICTAMEN NEGATIVO**, para que el honorable Pleno decida sobre el mismo.

DADO EN LA SALA DE LA COMISION EXTRAORDINARIA DE REFORMA AL SECTOR JUSTICIA, EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, EL VEINTISEIS DE SEPTIEMBRE DE DE DOS MIL ONCE.


Nineth Varenca Montenegro Cottom


Carlos Rafael Fión Morales

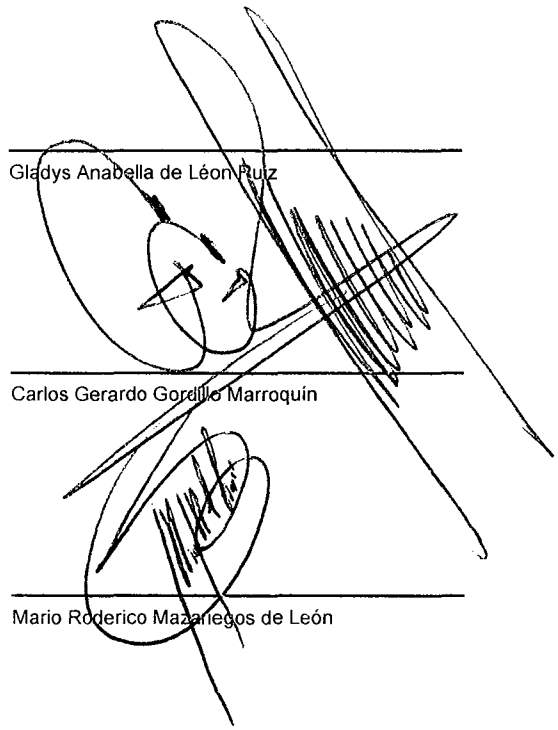

Jorge Mario Barrios Falla


Rosa María Angel Madrid de Frade



000016

Congreso de la República
Guatemala, C. A.

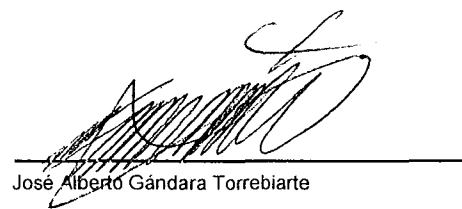


Gladys Anabella de León Ruiz

Carlos Gerardo Gordillo Marroquín

Mario Roderico Mazariegos de León

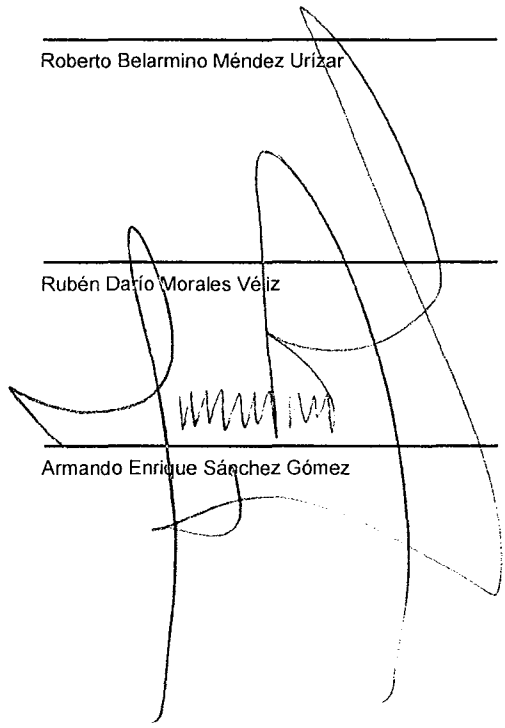
Julio Recinos Castañeda



José Alberto Gándara Torrebiarte

Roberto Belarmino Méndez Urizar

Rubén Darío Morales Véliz



Armando Enrique Sánchez Gómez

GUATEMALA, C. A.

DIRECCIÓN LEGISLATIVA
- CONTROL DE INICIATIVAS -

NUMERO DE REGISTRO

4285

FECHA QUE CONOCIÓ EL PLENO: 05 DE ABRIL DE 2011.

INICIATIVA DE LEY PRESENTADA POR LOS REPRESENTANTES ROBERTO RICARDO VILLATE
VILLATORO, LILIAN ELIZABETH DONIS, GALIM ADAMI MORALES BARRIOS Y COMPAÑEROS.

ASUNTO:

INICIATIVA QUE DISPONE APROBAR LEY DE PROTECCIÓN PARA JUECES Y
FISCALES ESPECIALES.TRÁMITE: PASE A LA COMISIÓN EXTRAORDINARIA DE REFORMA AL SECTOR
JUSTICIA PARA SU ESTUDIO Y DICTAMEN CORRESPONDIENTE.

Los fiscales especiales, jueces y magistrados que conocen procesos penales de alto impacto social, narcotráfico o cometidos por el crimen organizado ponen en riesgo la vida y la de su núcleo familiar, e incluso existe intimidación por parte de sindicatos de estos delitos que hace casi imposible promover la justicia en Guatemala por parte de estos profesionales del derecho.

No obstante, es preeminente que los fiscales especiales, jueces y magistrados que conocen procesos penales sobre delitos de alto impacto social y narcotráfico se les concedan los medios idóneos, necesarios y justos para su seguridad personal y de su familiar, puesto que cada día ponen en peligro su integridad y la vida al resolver procesos penales que tienden a sancionar a los responsables que violentan la ley y cometen hechos delictivos considerados éstos por la sociedad como de alto impacto social y del narcotráfico, razón por la cual las entidades públicas a las cuales prestan sus servicios profesionales deben proporcionar los medios necesarios para la seguridad de su persona y familia. Asimismo, los medios como vehículos automotores especiales y la seguridad personal que tiendan a resguardar su integridad deben proporcionárseles por parte del Estado.

Para otorgar seguridad a la integridad y la vida de los fiscales especiales, jueces y magistrados deberán las instituciones a las cuales prestan sus servicios profesionales destinar, como mínimo, el 0.5% del presupuesto asignado por el Congreso de la República, para esta finalidad, recursos que estarán disponibles a criterio de una Junta Jurídica Penal de Protección, integrada por el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, el Fiscal General de la República y el Presidente de la Asociación de Jueces y Magistrados.

Por esta razón, se promueve la presente disposición legislativa, con la finalidad de promover la seguridad de los promotores de la justicia en nuestro país y que de cierta forma se encuentran vinculados directamente en los procesos penales que conocen y resuelven procesos penales de hechos ilícitos de alto impacto social y del narcotráfico, para cumplir efectivamente con los preceptos constitucionales de una justicia pronta y cumplida y que sus resoluciones sean dictadas con discernimiento, sin presión alguna que pudiera posibilitar un sesgo fuera del ámbito del derecho, dejando la

DECRETO NÚMERO ...**EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA****CONSIDERANDO:**

Que la Constitución Política de la República preceptúa que el Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia, siendo fin supremo es la realización del bien común, y su deber garantizarle a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona, asimismo, garantiza y protege la vida humana desde su concepción, la integridad y la seguridad de la persona.

CONSIDERANDO:

Que en atención a lo que preceptúa la Carta Magna, la justicia se imparte de conformidad con la Carta Magna y las leyes, y corresponde a los tribunales de justicia la potestad de juzgar y promover la ejecución de lo juzgado, los demás organismos del Estado deberán prestar a los tribunales el auxilio que requieran para el cumplimiento de sus resoluciones.

CONSIDERANDO:

Que en la aplicación de la justicia los fiscales especiales, jueces y magistrados son independientes en el ejercicio de sus funciones y están sujetos únicamente a la Constitución Política de la República y las leyes, quedando prohibido la subordinación y atentar contra la independencia del Organismo Judicial, siendo la función jurisdiccional exclusiva para la Corte Suprema de Justicia y por los demás tribunales que la ley establezca, ninguna otra autoridad podrá intervenir en la administración de justicia.

CONSIDERANDO:

Que tribunales integrados por jueces y magistrados que conocen procesos penales promovidos por fiscales especiales en los cuales se sindicaron a personas que cometieron ilícitos penales considerados por la sociedad de alto impacto social o narcotráfico, así como aquellos cometidos por personas que integran el crimen organizado que ponen en riesgo su vida y la de su núcleo familiar, se ha comprobado que existe intimidación por parte de los sindicados para fallar a su favor o no realizar la investigación idónea a efecto de obtener una sentencia condenatoria, por lo que es necesario la creación de una disposición jurídica que permita conferírseles seguridad personal y los medios de circulación efectivos que permitan el resguardo de su integridad física y la vida de todo fiscal especial, juez y magistrado que participan en dichos procesos.

CONSIDERANDO:

Que para conferírseles la seguridad idónea se crea un fondo especial que deberá tomarse en un 0.5% del presupuesto asignado para cada institución a la cual prestan sus servicios, del cual dispondrá una junta Jurídica Penal de Protección integrada por el

ARTICULO 7. Equipo. El equipo que podrán proporcionar la Corte Suprema de Justicia y el Fiscal General del Ministerio público será el idóneo para guardar la seguridad de los jueces, magistrados y fiscales, así como de vehículo blindado para su protección personal y la de su familia.

ARTICULO 8. Fondo. Se crea el Fondo de Protección que servirá para conferir seguridad y protección personal a los fiscales especiales, jueces y magistrados que tengan relación directa en procesos penales que conozcan de delitos de alto impacto social y del narcotráfico. Este fondo de protección se integrará con recursos del 0.5% del presupuesto asignado al Ministerio Público y al Organismo Judicial por parte del Congreso de la República para cada ejercicio fiscal.

ARTICULO 9. Reglamento. El Reglamento de la presente Ley deberá emitirse dentro del plazo de sesenta días a partir su entrada en vigencia.

ARTICULO 10. Derogatoria. Quedan derogadas todas las disposiciones ordinarias y reglamentarias que se opongan a la presente Ley.

ARTICULO 11. Vigencia. El presente Decreto entrará en vigencia el día siguiente de su publicación en el diario oficial.

REMITASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCION,
PROMULGACION Y PUBLICACION.

EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA
CIUDAD DE GUATEMALA, A LOS _____ DIAS DEL MES DE
_____ DEL AÑO DOS MIL DIEZ.

A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to be a cursive representation of a name, possibly 'Gonzalez' or similar, written over a horizontal line.



INICIATIVA DE LEY 4285 “LEY DE PROTECCIÓN PARA JUECES Y FISCALES ESPECIALES”

Análisis por artículos

Artículo 1.

Actualmente existen varios jueces que no pertenecen al ramo penal y que tienen personal de seguridad asignado, debido a que son objeto de amenazas en el cumplimiento del ejercicio de sus funciones, por lo que se considera que la seguridad debe brindarse a Jueces y Magistrados, independientemente del ramo en el que se desempeñen, ya que no únicamente los que conocen delitos de alto impacto social y narcotráfico, corren peligro o están amenazados.

Artículo 2.

Este artículo se contradice con lo estipulado en el artículo 4 de la misma ley, la cual establece que el cuerpo de seguridad de los Jueces y Magistrados será nombrado por la Corte Suprema de Justicia y el Fiscal General de la República.

Artículo 3.

La Corte Suprema ya emitió los Acuerdos correspondientes en los cuales se enumeran los delitos clasificados como de Alto Impacto Social, por lo que se considera innecesaria esta disposición.

Artículo 5

Lo dispuesto en este artículo puede vulnerar la independencia de los jueces, ya que el Ministerio Público formará parte del ente colegiado que dispondrá acerca de su seguridad y la de su familia, lo cual no es conveniente, debido a que los fiscales son parte de los procesos penales.

Artículo 6

Este artículo se refiere la integración de la Junta Jurídica Penal de Protección, sin embargo no establece quienes la integrarán; dentro del proyecto de ley únicamente en la parte considerativa se hace referencia a quienes conformarán la Junta, siendo el Presidente del Organismo Judicial, el Fiscal General y el Presidente de la Asociación de Jueces y Magistrados, pero no se desarrolla en la parte normativa del proyecto de ley.

Artículo 7

Lo estipulado en este artículo es ideal para la seguridad de los Jueces, Magistrados, Fiscales y sus familias, sin embargo está muy alejado de la realidad, ya que el presupuesto con el cual se cuenta, no permite brindar seguridad en la forma propuesta.

Artículo 8

El fondo propuesto es insuficiente para cubrir las necesidades de seguridad del Organismo Judicial, actualmente el Presupuesto del Organismo Judicial no alcanza para solventar los requerimientos de funcionamiento y mucho menos de inversión. Aunado a lo anterior en el detalle de gastos que se incluye se puede observar que los 6.5 millones a que aproximadamente equivale el 0.5 % del presupuesto de ingresos del Organismo Judicial, no alcanza ni para cubrir a dos tribunales de sentencia de alto impacto.

1. La ley debería ser enfocada a la seguridad en general de Jueces, Magistrados y fiscales que en su momento soliciten seguridad, no únicamente enfocarlo en tribunales de alto impacto, ya que en la actualidad por la misma naturaleza de la creación de estos Juzgados, el Organismo Judicial ya cuenta con seguridad para ellos, lo cual haría que esta normativa fuera innecesaria.
2. Se considera que existe conflicto entre lo estipulado en el proyecto de ley y la independencia funcional y económica del Organismo Judicial, que garantizan los artículos 205 de la Constitución Política de la República de Guatemala y 52 de la Ley del Organismo Judicial, así como en cuanto al derecho a seleccionar su personal, específicamente en cuanto a lo siguiente:

Conclusiones

- a) En cuanto a la independencia funcional, se considera que la propuesta de integración de la Junta Jurídica Penal de Protección, vulnera esta garantía, ya que el Organismo Judicial estará sujeto a lo que dicha Junta resuelva, siendo ella integrada por dos instituciones ajenas a este Organismo.
- b) Al integrar la referida Junta Jurídica Penal de Protección el Fiscal General, también se puede comprometer la independencia judicial, al ser parte el Ministerio Público en los juicios que conocen los juzgados y tribunales de alto impacto.
- c) Es garantía constitucional del Organismo Judicial, la selección de su personal, por lo que al intervenir instituciones ajenas en esa decisión, también se estaría violando este precepto, específicamente en cuanto al nombramiento de personal al que se refiere el artículo 4 de la iniciativa analizada.
- d) Por último la independencia económica del Organismo Judicial se ve afectada, en cuanto a que se dispone crear un fondo común con el 0.5% del presupuesto de este Organismo y del Ministerio Público, teniendo injerencia nuevamente, instituciones que nada tienen que ver con la función del Organismo Judicial, esta vez en el tema económico.

3. Se estima que no es pertinente que el Presidente de la Asociación de Jueces y Magistrados forme parte de la Junta Jurídica Penal de Protección, ya que se desnaturalizaría la función de dicha institución, que entre otros aspectos vela por los derechos de los jueces y magistrados, desde una esfera diferente, por lo que su participación directa en la toma de decisiones de la administración pública, podría comprometer los fines y objetivos para lo cual fue constituida, de conformidad con el artículo 4 de sus estatutos.
4. El proyecto analizado no es congruente con la realidad y las necesidades de seguridad del Organismo Judicial, los fondos asignados son insuficientes y la organización y funcionamiento propuestos violatorios de las garantías constitucionales otorgadas a este Organismo.

Costo estimado de seguridad

COSTO ESTIMADO DE SEGURIDAD			
TRIBUNAL DE SENTENCIA			
	PRESIDENTE	VOCAL	VOCAL
Salario Anual de los Agentes*	Q368.800,00	Q368.800,00	Q368.800,00
Equipo Básico de los Agentes**	Q32.000,00	Q32.000,00	Q32.000,00
Vehículo Blindado	Q400.000,00	Q400.000,00	Q400.000,00
Gasolina Anual	Q15.000,00	Q15.000,00	Q15.000,00
Mantenimiento Anual del Vehículo	Q14.000,00	Q14.000,00	Q14.000,00
Uniformes de los Agentes***	Q8.000,00	Q8.000,00	Q8.000,00
Sub Total	Q837.800,00	Q837.800,00	Q837.800,00
Total			Q2.513.400,00

* 4 Agentes de Seguridad por Juez, divididos en dos turnos.

** 1 Arma por agente

*** 2 Uniformes por Agente

Costo estimado de seguridad

COSTO ESTIMADO DE SEGURIDAD			
TRIBUNAL DE SENTENCIA y FAMILIA			
	PRESIDENTE	VOCAL	VOCAL
Salario Anual de los Agentes*	Q737.600.00	Q737.600.00	Q737.600.00
Equipo Básico de los Agentes**	Q64.000.00	Q64.000.00	Q64.000.00
Vehículos Blindados	Q800.000.00	Q800.000.00	Q800.000.00
Gasolina Anual	Q15.000.00	Q15.000.00	Q15.000.00
Mantenimiento Anual de los Vehículos	Q28.000.00	Q28.000.00	Q28.000.00
Uniformes de los Agentes***	Q16.000.00	Q16.000.00	Q16.000.00
Sub Total	Q1.660.600.00	Q1.660.600.00	Q1.660.600.00
Total			Q4.981.800.00

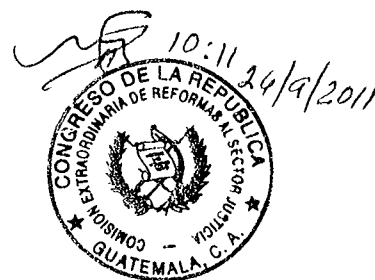
* 8 Agentes de Seguridad por Juez: 4 para el Juez y 4 para su familia; divididos en dos turnos: 2 agentes por turno.

** 1 Arma por agente

*** 2 Uniformes por Agente

Recomendaciones

1. Se recomienda que la seguridad de los Jueces y Magistrados del Organismo Judicial, sea brindada por personal especializado asignado por este Organismo, es decir, sin la intervención de instituciones ajenas, que podrían comprometer la independencia de los Jueces y la independencia funcional y económica de este Organismo.
2. Es pertinente la creación de un fondo independiente al Presupuesto de Ingresos del Organismo Judicial, destinado exclusivamente para la seguridad de los Jueces y Magistrados o la ampliación de dicho presupuesto en forma considerable. Se reitera que la cantidad propuesta en la iniciativa es insuficiente.



Congreso de la República
Guatemala, C. A.

Guatemala, 25 de julio de 2011
No.0268-2011

000028

Diputada
Ninet Montenegro
Presidenta
Comisión Extraordinaria de Modernización del Sector Justicia
Ciudad

Honorable Diputada:

Hago referencia a la iniciativa de ley No.4285 que proyecta la "ley de protección de jueces y fiscales especiales" y que adjunta en su oficio del 22 de julio 2011.

Al respecto cabe recordar la estructura orgánica del gobierno del Estado de Guatemala en el marco del régimen constitucional instituido, como sigue en los artículos 141, 182, 183, 203 y 246 de la Constitución Política de la República:

- 1) La soberanía radica en el pueblo quien la delega, para su ejercicio, en los Organismos Legislativo, Ejecutivo y Judicial. La subordinación entre los mismos, es prohibida.(141)
- 2) El Presidente de la República es el Jefe del Estado de Guatemala y ejerce las funciones del Organismo Ejecutivo por mandato del pueblo. (extracto 182)
- 3) Son funciones del Presidente de la República: b) Proveer a la defensa y a la seguridad de la Nación, así como a la conservación del orden público; c) Ejercer el mando a las Fuerzas Armadas de la Nación, con todas las funciones y atribuciones respectivas; d) Ejercer el mando de toda la fuerza pública; q) Administrar la hacienda pública con arreglo a la ley (extracto 183)
- 4) El Presidente de la República es el Comandante General del Ejército (extracto 246)
- 5) Corresponde a los tribunales de justicia la protestad de juzgar y promover la ejecución de lo juzgado. Los otros organismos del Estado deberán prestar a los tribunales el auxilio que requieran para el cumplimiento de sus resoluciones (extracto 203).
- 6) A quienes atentaren contra la independencia del organismo Judicial, además de imponérseles las penas fijadas por el Código Penal, se les inhabilitará para ejercer cualquier cargo público (extracto 203).

En consecuencia el Organismo Ejecutivo es la institución constitucionalmente responsable de garantizar la vida y seguridad de de los jueces, magistrados y fiscales a que se refiere la Iniciativa de Ley No.4285, quien debe cumplir en situación normal mediante el Ministerio de Gobernación, la Policía Nacional Civil y la Secretaría Administrativa de Seguridad (SAAS) de la Presidencia de la República, y en caso de emergencia mediante el Ministerio de la Defensa Nacional que administra al Ejército de Guatemala.





000029

Congreso de la República
Guatemala, C. A.

De tal manera que podría ser interpretado como desvirtuar la estructura orgánica de los poderes del Estado, la creación de una ley de seguridad policial para ser administrada por la Corte Suprema de Justicia o por el Ministerio Público.

Recordar que periódicamente el Procurador de los Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y eventualmente la Corte Interamericana de Derechos Humanos, piden al gobierno de la República se apliquen medidas cautelares de protección de la vida de determinados ciudadanos, como el caso de los defensores de derechos humanos, dirigentes sindicales y otras personas, y a dichas personalidades obligadamente les da protección física la Policía Nacional Civil (PNC) y el Ministerio de Gobernación. A los funcionarios públicos que así lo requieren, especialmente del gabinete ministerial, al Jefe de Estado, y a funcionarios internacionales les da dicha protección y seguridad, la SAAS.

En tal sentido se solicita y recomienda:

- A) Tomar nota que la función de dotar a la población y los funcionarios públicos de la seguridad de la vida y los bienes, así como la seguridad de los bienes de la Nación, es una función esencial del Organismo Ejecutivo, del Presidente de la República y los Ministerios y dependencia de gobierno correspondientes;
- B) Que se considere una propuesta de ley, pero para crear la UNIDAD DE PROTECCION DE JUECES, MAGISTRADOS, FISCALES, FUNCIONARIOS PUBLICOS, FUNCIONARIOS INTERNACIONALES y PERSONALIDADES ESPECIALES, pero, bajo la jurisdicción y responsabilidad del Ministerio de gobernación, la Policía Nacional Civil y con ello del Organismo Ejecutivo.

Para ello se sugiere aprovechar las diligencias de la propuesta 4285 y transformarla a un instrumento jurídico que no vaya a adolecer de riesgos constitucionales y que en la práctica "funcione a favor de la vida" de las personas relacionadas.

Al reiterarle muestras de consideración, me suscribo, deferentemente.


Armando Enrique Sánchez Gómez
Diputado



Fiscalía General de la República
Ministerio Público
Guatemala, C. A.

000030

DFG-489-2011
Guatemala, 5 de agosto de 2011

Licenciada
Nineth Montenegro
Presidencia de la Comisión Extraordinaria
de Reformas al Sector Justicia
Congreso de la República de Guatemala
Su despacho

Estimada Licenciada:

Reciba un cordial saludo, deseándole éxitos en sus actividades diarias. En atención al oficio de referencia 18-2011/NMrr, deseo hacer de su conocimiento el dictamen jurídico sobre la iniciativa número 4285, que dispone aprobar la "Ley de Protección para Jueces y Fiscales Especiales", el cual se adjunta a la presente.

Respecto a las demás interrogantes formuladas, deseo informar lo siguiente:

- a) El presupuesto que el Ministerio Público destina a la protección de fiscales asciende a Q 29, 636,288.20 (Ver Anexo I y II).
- b) El número de fiscales que gozan del Servicio de Seguridad Ejecutiva de Protección de Personal es de 55. Respecto al tiempo que dura la protección es conforme a la duración de la relación laboral del fiscal con el Ministerio Público. Sin embargo, el Departamento de Seguridad deberá evaluar permanentemente el servicio de seguridad que se brinda, para determinar si se está prestando de manera eficaz; y si es necesaria la continuidad del servicio de seguridad asignado.
- c) En cuanto al procedimiento que se utiliza para establecer quién debe gozar de algún tipo de protección, éste se realiza una vez que los funcionarios que por amenazas, extorsiones o cualquier otro tipo de intimidación, determinen que existe vulnerabilidad contra la vida, integridad física, mental y moral, propiedad, libertad propia o de su familiares inmediatos, podrán elaborar y presentar la solicitud ante el departamento de seguridad, una vez requerido la solicitud en mención, el departamento de seguridad debe efectuar el análisis y evaluación de riesgos.

000031

Fiscalía General de la República
Ministerio Público
Guatemala, C. A.

-2-

Los criterios para determinar a quién se le otorga protección son: Identificación del entorno en donde se moviliza o desenvuelve el solicitante; Tipo de actividad que realiza y cargo que desempeña en la institución; Casos que conoce el solicitante; Identificación del tipo de personas que pueden amenazarlo; Determinar el nivel de riesgo; y Viabilidad de la aplicación de las medidas de protección; y La adaptación de la persona a las medidas de seguridad.

Sin otro particular, quedo de usted.

Deferentemente,

Claudia Paz
Doctora Claudia Paz y Paz Bailey
Fiscal General de la República
Jefa del Ministerio Público de Guatemala



ANEXO I

MINISTERIO PUBLICO
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS AÑO 2011
DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD (Plazas ocupadas)
- EN QUETZALES -

PUESTO	CANTIDAD	MESES	SUELDO BASE	BONIFICACIÓN PROFESIONAL	TOTAL MENSUAL	TOTAL SALARIO ANUAL	CUOTA PATRONAL IGSS	BONO VACACIONAL	BONO 14	BONO LABORAL	BONO EXTRAORD.	AGUINALDO	BONO INCENTIVO	FONDO INVERSIÓN	TOTAL
AGENTES DE SEGURIDAD I	315	12	3,620.43	-	3,620.43	13,685,225.40	1,460,213.55	141,750.00	1,140,435.45	1,140,435.45	1,140,435.45	1,140,435.45	945,000.00	821,113.52	21,615,044.2
AGENTES DE SEGURIDAD II	29	12	4,099.87	-	4,099.87	1,426,754.76	152,234.73	13,050.00	118,896.23	118,896.23	118,896.23	118,896.23	87,000.00	85,605.29	2,240,229.7
AGENTES DE SEGURIDAD III	50	12	4,580.57	-	4,580.57	2,748,342.00	293,248.09	22,500.00	229,028.50	229,028.50	229,028.50	229,028.50	150,000.00	164,900.52	4,295,104.6
JEFE DE COMITIVA DE SEGURIDAD DEL FISCAL GENERAL	1	12	6,700.00	-	6,700.00	80,400.00	8,578.68	450.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	3,000.00	4,824.00	124,052.6
JEFE DE SEGURIDAD	1	12	11,855.90	375.00	12,230.90	146,770.80	15,660.44	450.00	12,230.90	12,230.90	12,230.90	12,230.90	3,000.00	8,806.25	223,611.0
IMPACTO FINANCIERO	396					18,087,492.96	1,929,935.50	178,200.00	1,507,291.08	1,507,291.08	1,507,291.08	1,507,291.08	1,188,000.00	1,085,249.58	28,498,042.3

29,636,288.20

000032

ANEXO II

**MINISTERIO PÚBLICO
PRESUPUESTO DE INGRESOS-EGRESOS 2011
BONOS DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD**

EN QUETZALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA		BONO DE ANTICIPADO	BONO DE COMPENSACION Y RIESGO ANUAL (SEGURIDAD)	TOTAL MENSUAL	TOTAL ANUAL
		015	015	015	015
TOTALES ANUALES		387,042.00	751,203.84	1,138,245.84	
TOTALES		32,253.50	62,600.32	94,853.82	1,138,245.84
Coordinacion General	01.00.000.001.000	32,253.50	300.00	32,553.50	390,642.00
Serv. Administrativos	01.00.000.005.000		3,000.00	3,000.00	36,000.00
Fisc. Malacatán S.M	11.02.000.020.000		9,630.32	9,630.32	115,563.84
Fisc. Sta. Eulalia	11.02.000.023.000		6,800.00	6,800.00	81,600.00
Fisc. Nebaj el Quiche	11.02.000.025.000		4,800.00	4,800.00	57,600.00
Fisc. Ixcan Playa Grande	11.02.000.026.000		7,000.00	7,000.00	84,000.00
Fisc. El Petén	11.02.000.029.000		17,870.00	17,870.00	214,440.00
Fisc. La libertad	11.02.000.030.000		6,900.00	6,900.00	82,800.00
Fisc. De Poptun	11.02.000.031.000		5,600.00	5,600.00	67,200.00
Fisc. menores o niñez	11.04.000.006.000		700.00	700.00	8,400.00